



*III Acuerdo Interinstitucional para
la coordinación de la atención a
víctimas de violencia machista
contra las mujeres en la CAE*

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2023.

Las personas firmantes exponen

I. Una violación de derechos humanos que apela a las instituciones públicas

La violencia machista contra las mujeres está internacionalmente reconocida como una violación de derechos humanos que afecta a un volumen muy importante de niñas, adolescentes y mujeres adultas, así como a sus hijas e hijos y en consecuencia a la sociedad en su conjunto. Se considera un problema social y de salud pública de primer orden ante el que las instituciones públicas están llamadas a actuar.

Es abundante la normativa que apela a la intervención por parte de los poderes públicos tanto a nivel internacional como estatal y, por supuesto, a nivel de la CAE. Entre otras cabe citar: la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, CEDAW, de 1979; el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, de 2011 (Convenio de Estambul); la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004); la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; la normativa surgida a partir del Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en 2017; la Ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual; y la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres (tras la segunda modificación del 3 de marzo de 2022)..

En coherencia, se ha tratado de mejorar la respuesta frente a la violencia machista contra las mujeres desarrollando diferentes leyes y otras normas con las que se han ido impulsando y estableciendo medidas dirigidas a la prevención y erradicación de este tipo de violencia, a la protección a las víctimas y al rechazo, castigo e intolerancia frente a quienes la ejercen.

La ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres establece que será una prioridad de los poderes públicos vascos la atención integral, recuperación y reparación de las víctimas de la violencia machista contra las mujeres.

II. Un problema estructural cuyo origen está en la desigualdad

La normativa de referencia reconoce que la violencia machista contra las mujeres es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de la discriminación contra las mujeres que desempeña, además, la función social de perpetuar las estructurales desigualdades que existen en función del género.

Esta violencia es consecuencia de la desigualdad y de las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres, como lo son, entre otras, la brecha salarial, la feminización de la pobreza o la infrarrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones. Esta violencia es la expresión más extrema de la desigualdad de mujeres y hombres y, por lo tanto, los avances globales en la igualdad son avances hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se define como una violencia estructural y sistémica que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de la vida dentro de una estructura social machista, por lo tanto, aunque es protagonizada por personas concretas en sus relaciones privadas, guarda relación con la organización de la sociedad y se sustenta en el tradicional reparto de papeles y responsabilidades en la sociedad y en la familia en función del sexo, el cual sitúa a las mujeres en una posición subordinada respecto de los hombres.

Las raíces de la violencia contra las mujeres están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y la discriminación generalizada contra las mujeres en los sectores tanto público como privado. Las disparidades de poder, las normas culturales discriminatorias y las desigualdades económicas socavan los derechos humanos de las mujeres y perpetúan la violencia. El problema de la violencia contra las mujeres no se reduce a las agresiones, la violencia es una forma de relacionarse que otorga privilegios y que se utiliza para mantener esta asimetría relacional y subordinar a las mujeres. En este sentido, es también un instrumento de control social clave para que dicha desigualdad se mantenga, se reproduzca y se perpetúe, pues es producto y a la vez generadora de relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres.

Este tipo de violencia no se limita a una cultura, región o país en particular, ni a grupos específicos de mujeres dentro de una sociedad. Aunque la situación de unas y otras mujeres sea bien diferente (mujeres africanas, asiáticas, latinoamericanas, europeas, niñas, jóvenes, adultas, ancianas, asalariadas, desempleadas...) les une esa situación de inferioridad y subordinación con respecto a los hombres que adquiere muy distintas manifestaciones.

Esta violencia supone un problema social que implica graves consecuencias a muchos niveles en el bienestar y calidad de vida de todas las mujeres. Ahora bien, la edad, la nacionalidad, el origen o extracto cultural, la discapacidad, la situación administrativa de residencia en el caso de mujeres migrantes, la pobreza o la falta de autonomía económica, junto con otros factores que interseccionan entre sí, influyen en que las situaciones de violencia se intensifiquen y la situación y posición de muchas mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía sea más desventajosa.

III. Logros de acuerdos de coordinación previos

La violencia machista contra las mujeres es un problema de naturaleza multidimensional ante el que los poderes públicos deben aunar esfuerzos y su respuesta exige acuerdos, compromisos y coordinación de múltiples agentes y de todos los niveles institucionales. En los últimos 20 años en la CAE se han dado importantes pasos en esta dirección¹.

En 2001 se firmó el *"I Acuerdo Interinstitucional para la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales"*, asentado sobre más de una década de trabajo de la administración pública vasca en políticas de igualdad. Fue una iniciativa pionera dentro y fuera de la CAE. Resaltó el vínculo directo existente entre discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres en un momento en el que aún no se había publicado ninguno de los pilares legislativos de referencia con los que contamos hoy. Su firma comprometió por primera vez a un conjunto de instituciones implicadas en la atención a las víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales que acordaron adecuar sus procedimientos o actuaciones a unas pautas homogéneas de actuación para toda la CAE para cada uno de los ámbitos de intervención representados en la firma (salud, servicios sociales, seguridad, y justicia). Supuso también la creación de espacios posibilitadores de relaciones periódicas entre profesionales que ha facilitado el trabajo conjunto en torno a temas específicos en el ámbito de la violencia machista contra las mujeres.

Las pautas recogidas en el mismo sentaron las bases del siguiente acuerdo y también fueron referencia ineludible y fuente de inspiración para todos los protocolos de ámbito local que se desplegaron por todo el territorio de la CAE. En sus ocho años de vigencia se promulgaron numerosas leyes que exigían cambios sustanciales en los servicios y recursos que se debían brindar a las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia. En este contexto era imprescindible la adecuación de sus contenidos y ello motivó la firma en 2009 del *"II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual"*.

Desde la entrada en vigor del II Acuerdo se ha ampliado, fortalecido y desarrollado el modelo de coordinación interinstitucional. Motivó, entre otros: la adecuación del procedimiento de respuesta institucional coordinada ante los casos de muerte por maltrato doméstico y violencia sexual; el impulso de la reflexión en torno al reconocimiento de las hijas y los hijos como víctimas directas de la violencia de género antes de la aprobación de la normativa correspondiente; el trabajo en torno al tratamiento de datos personales de víctimas de violencia contra las mujeres; y la promoción de la mejora de la respuesta a las mujeres con discapacidad en colaboración con EDEKA en coherencia con los principios adoptados. Cabe destacar, además, el proceso de diagnóstico referente a la formación de las y los profesionales implicados en la respuesta a mujeres en situación de violencia a partir del cual se diseñó e impulsó el Programa Jabetuz para la formación especializada de profesionales de todos los ámbitos y sistemas.

¹ Puede consultarse un dossier con mayor detalle en: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/dossier_20_anos_camino_recorrido.pdf

Tanto el I Acuerdo como el II Acuerdo han supuesto un avance indiscutible para mejorar la respuesta de las instituciones vascas ante la violencia machista contra las mujeres y han sentado las bases para una colaboración interinstitucional más intensa y estable en coherencia con un problema de esta magnitud. Han permitido articular en cierta medida el entramado de servicios y recursos que se despliegan por todo el territorio de la CAE para la atención a mujeres en situación de violencia. Así mismo, disponer de herramientas para protocolizar y fortalecer el trabajo interinstitucional contribuye a un mejor acceso de las mujeres a todos los sistemas. Los avances en torno a la formación han contribuido también a la mejora en la detección precoz de situaciones de violencia contra las mujeres desde ámbitos diferentes, así como han favorecido las derivaciones entre servicios.

IV. Cambios normativos desde 2009

Desde 2009 se han producido hechos legislativos de gran relevancia en lo que se refiere a la intervención pública en esta materia que hace necesario actualizar los contenidos del II Acuerdo y revisar los protocolos, acuerdos de colaboración y otro tipo de instrumentos para la coordinación interinstitucional adoptados desde entonces.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, acordado el 11 de mayo de 2011 en Estambul, vinculante y en vigor desde 2014, es el primer instrumento obligatorio en Europa en materia de violencia contra las mujeres e implica uno de los compromisos de mayor alcance establecido hasta el momento en relación con la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los responsables. Considera la violencia contra la mujer como una grave violación de los derechos humanos y marca la necesidad de ampliar la visión de la violencia contra las mujeres de manera que se trasciende la definición de violencia de género que ofrece la Ley Orgánica 1/2004. Para el seguimiento de los compromisos adquiridos con la firma del Convenio se creó el llamado Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO) que emite recomendaciones generales de alto interés para las políticas en la materia.

A nivel estatal, cabe señalar la aprobación de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, la cual introdujo en la norma el concepto de género como agravante de discriminación, incluyó el delito de quebrantamiento de condena y tipificó el matrimonio forzado. Ese mismo año, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito avanzó en el reconocimiento de los derechos de las víctimas durante el proceso penal, incluido el derecho de protección y de indemnización.

Así mismo, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, reconocieron como víctimas a las y los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así como a las medidas de protección pertinentes.

También es reseñable el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en 2017, que planteó compromisos y medidas concretas para mejorar la respuesta institucional ante la violencia de género tal y como se define en la Ley Orgánica 1/2004, así como la visualización y atención de otras formas como la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado. A partir del mismo se han aprobado algunas normas como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género que, entre otras medidas, amplió la forma de acreditar administrativamente la situación de víctima de violencia por parte de los servicios del sistema de atención a dichas víctimas (Resolución de 2 de diciembre, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia). Este Decreto-Ley ha implicado modificaciones en numerosas normas como los apartados 2 y 5 del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género relativo a las ayudas sociales para las víctimas, y es previsible que en los próximos años siga desarrollándose el marco normativo a nivel estatal en relación con este Pacto.

Por su parte, la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, entre otras, añadió la formación en violencia de género a distintos ámbitos como el acceso a la carrera judicial o la especialización para acceder a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

La Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta incorpora medidas para la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o mayores de edad que precisen apoyo para tomar decisiones, en situaciones de separación o divorcio en contextos de violencia doméstica y de género.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, introdujo en el artículo 11 como principio rector de la actuación administrativa la protección de las y los menores de edad contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital femenina, entre otras. Además, estableció el deber que tienen todas las personas que tengan noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, establece que las administraciones públicas deben proveer de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual que incluyen acompañamiento y atención psicológica, jurídica y social.

En el ámbito de la CAE, la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres en su versión vigente y consolidada tras los cambios

introducidos a través de la Ley 1/2022 de 3 de marzo de modificación de la misma, viene a adaptar el marco legal a las necesidades y retos del nuevo contexto social y normativo, en especial al citado Convenio de Estambul. Cabe destacar especialmente, por su importancia para la acción de los poderes públicos vascos, la modificación llevada a cabo en el ámbito de la violencia. En concreto el *"Capítulo VII Violencia machista contra las mujeres"* implica un hito en la legislación en la materia.

Esta norma, en consonancia con la lógica de los Planes de Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, enmarca la respuesta institucional ante la violencia machista contra las mujeres en las políticas de igualdad. Entre las novedades más significativas destacan que: amplía las formas y tipos de violencia considerados en su conceptualización (más allá de la violencia de género definida por la Ley Orgánica 1/2004) y el ámbito del sujeto de derecho (además de las mujeres considera víctimas también las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha violencia y que por su situación de vulnerabilidad se vean directamente afectadas por aquella); hace hincapié en asegurar una mayor atención a la interseccionalidad y a la personalización de la atención; e insiste en evitar la revictimización y poner los derechos de las víctimas y su empoderamiento en el centro de la intervención con independencia de su grado de implicación en el procedimiento judicial.

El artículo 54.6. se refiere a la importancia de la detección precoz y apela a que las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, deben asegurar que las profesionales y los profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social actúan de forma proactiva y coordinada para detectar casos no explicitados de violencia machista contra las mujeres y encauzarlos adecuadamente. A tal fin, han de garantizar la existencia y aplicación de protocolos, elaborados de forma coordinada entre las instituciones implicadas, que incluyan los indicadores y pautas de actuación correspondientes.

Así mismo, a fin de procurar un abordaje más integral del problema y de ofrecer respuestas de mayor calidad, en su artículo 62 establece que la Administración de la Comunidad Autónoma, a través de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, ha de impulsar la actualización de los acuerdos de colaboración interinstitucional con el resto de administraciones públicas vascas con competencias en la materia, a fin de favorecer una detección temprana y una actuación coordinada y eficaz ante los casos de violencia machista contra las mujeres y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas. Asimismo, se han de promover fórmulas de colaboración con las restantes instituciones con competencia en la materia.

Precisamente con el fin de adecuar los contenidos del II Acuerdo Interinstitucional de 2009 a las nuevas circunstancias derivadas fundamentalmente de las modificaciones legales antes referidas y de complementar los protocolos, acuerdos de colaboración y otro tipo de instrumentos jurídicos adoptados desde entonces, se plantea la suscripción de este III Acuerdo Interinstitucional, como un acuerdo marco que podrá ser desarrollado, concretado y adecuado en función de los diferentes ámbitos de intervención.

V. Cambios sociales de los últimos años

Los cambios sociales acontecidos en los últimos años han significado que algunas formas de violencia adquieran mayor protagonismo, así como que emerjan nuevas formas de violencia machista contra las mujeres. En este contexto es especialmente importante redoblar los esfuerzos encaminados a la detección y a la revisión de protocolos.

La sociedad ha experimentado un cambio revolucionario en las formas de relación y comunicación debido al uso de tecnologías de la información y al desarrollo de Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles. La extensión del uso de dichas tecnologías ha supuesto el incremento de determinados riesgos de abuso y nuevas formas de violencia como el sexting (difusión de imágenes u otros contenidos de tipo sexual o erótico a través del móvil o internet), el grooming (abuso sexual de personas menores de edad llevado a cabo por parte de personas adultas coaccionando con la información y las imágenes que obtienen a través de internet), el cibercontrol, el ciberacoso sexual y sexista (actitudes denigrantes hacia las mujeres en la Red, de carácter repetitivo y no consentido, que suponen una intromisión en la vida privada de la víctimas), etc., dado el fácil acceso a las mismas y la privacidad e impunidad que ofrecen a los agresores.

El uso de las tecnologías para ejercer la violencia conlleva un agravamiento de las situaciones de violencia contra las mujeres en algunos contextos, como las relaciones de pareja o expareja y en especial las relaciones de pareja o expareja de personas adolescentes y jóvenes. Estas formas de ciberviolencia reproducen el machismo, sin embargo, son formas de violencia invisibilizadas, que a menudo no se cuestionan y no se combaten. El GREVIO, dedica su Recomendación General nº 1, precisamente, a la dimensión digital de la violencia contra las mujeres.

También han adquirido cada vez mayor visibilidad las agresiones sexuales a mujeres perpetradas por un grupo de hombres o las mediadas por la denominada "sumisión química", mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima. Formas de violencia que han tenido un importante impacto socialmente en términos de indignación y denuncia social.

Así mismo, debe considerarse violencia machista contra las mujeres aquella violencia ejercida contra personas de su entorno cercano o afectivo, especialmente contra sus hijos e hijas, con la voluntad de generarles daño a ellas y que es conocida como "violencia vicaria".

Entre los cambios sociales también cabe mencionar los cambios sociodemográficos vinculados con el crecimiento de los procesos migratorios, el incremento de las tasas de pobreza y exclusión que afecta especialmente a mujeres, jóvenes y personas migrantes, la evolución del papel del trabajo en la inclusión social, el envejecimiento de la población y la vulnerabilidad de las mujeres mayores, etc. Es crucial considerar el impacto de todos estos factores en la complejización de los procesos de recuperación de algunas mujeres.

Por otro lado, las reivindicaciones de mayor igualdad y erradicación de la violencia machista de las mujeres y organizaciones feministas han ganado capacidad de incidencia sociopolítica y la sociedad exige mayores esfuerzos a los poderes públicos.

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes en la representación que ostenta,

Acuerdan

Primero

El objeto del presente Acuerdo es lograr la máxima y mejor coordinación y colaboración entre las instituciones implicadas en la CAE en la atención integral a las víctimas de violencia machista contra las mujeres, con el fin último de mejorar la atención que se les presta y ayudar a las víctimas a que puedan lograr una vida satisfactoria sin violencia machista. Para ello se adoptarán pautas que garanticen una actuación homogénea en la CAE y una atención integral y de calidad en los ámbitos sanitario, policial, judicial, de servicios sociales, educativo, de vivienda y de empleo.

Segundo

Las instituciones firmantes acuerdan la terminología "*violencia machista contra las mujeres*" en coherencia con la denominación introducida por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

A efectos de este Acuerdo se entiende por violencia machista contra las mujeres lo establecido en dicha Ley: "*toda violencia que se ejerza contra las mujeres, incluidas las niñas y adolescentes y las mujeres transexuales, por el hecho de ser mujeres, o que les afecte de forma desproporcionada, tanto en el ámbito público como en el privado*".

"La violencia se puede ejercer tanto por acción como por omisión y los medios para ejercerla pueden ser físicos, psicológicos o económicos, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones, que tengan como resultado un daño, sufrimiento o perjuicio físico, sexual, psicológico, social, socioeconómico o patrimonial".

"Constituyen violencia machista contra las mujeres la violencia en la pareja o expareja, la intrafamiliar, la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos y otras prácticas tradicionales perjudiciales, la coacción o privación arbitraria de libertad, la tortura, la violencia institucional, el acoso, la violencia política de género, la violencia digital y en redes sociales, la obstétrica, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres y niñas que se halle prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal español o en la normativa estatal o autonómica. Todo ello, independientemente de que se produzcan en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye, pero no se limita a, los ámbitos familiar, laboral, educativo, sanitario, deportivo y comunitario, los medios de comunicación, los espacios de ocio y festivos y el entorno virtual".

Se considera asimismo violencia machista contra las mujeres "*la violencia ejercida contra las personas que apoyan a las víctimas, así como la ejercida contra su entorno cercano o afectivo, especialmente contra los hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad de afligir a la mujer*".

De acuerdo con esta norma, además de las mujeres, adolescentes y niñas que sufren en primera persona las conductas violentas por motivos de género, *"son víctimas de la violencia machista contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha violencia y que por su situación de vulnerabilidad se vean directamente afectadas por aquella"*.

El concepto "víctima" engloba también a las personas "supervivientes" de la violencia que han emprendido un proceso de recuperación, en línea con lo establecido en los tratados internacionales y en los textos legales sobre la materia.

Así mismo, cabe considerar que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual establece que las violencias sexuales han de ser entendidas como *"cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital"*. En todo caso se consideran violencias sexuales los delitos previstos en el título VIII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.

Asumir esta conceptualización de la violencia significa ampliar el marco de actuación con respecto a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004) y también con respecto del II Acuerdo, al tomar en consideración otras manifestaciones y formas de violencia contra las mujeres además de la violencia ejercida contra ellas por parte de quien es o ha sido su pareja, la ejercida en el ámbito familiar por parte de otro familiar y la violencia sexual fuera de este ámbito. Estas formas de violencia, sobre las que se ha venido trabajando en los acuerdos de coordinación previos, seguirán constituyendo el foco principal a fin de afianzar los avances conseguidos.

Todas las partes firmantes de este Acuerdo, dentro del máximo respeto a sus competencias y, en especial, a la independencia judicial, irán alineando sus actuaciones de coordinación y colaboración interinstitucional hacia esta conceptualización de la violencia contra las mujeres y ampliación del ámbito subjetivo del Acuerdo, de manera que se brinde respuesta adecuada a todas las víctimas de todas las formas de violencia machista.

Tercero

Las instituciones firmantes se comprometen a adecuar su actuación ante situaciones de violencia machista contra las mujeres siguiendo los principios rectores y las pautas definidas en el Protocolo de Actuación Coordinada que se incorpora al presente Acuerdo; todo ello, dentro del máximo respeto a sus respectivas competencias y, en especial, a la independencia judicial.

Cuarto

Con el fin de favorecer la efectiva aplicación de los principios y pautas de actuación contempladas en el Protocolo de Actuación Coordinada, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco difundirá los contenidos de éste entre todas las juezas y todos los jueces implicados en la persecución de infracciones penales derivadas de situaciones de violencia machista contra las mujeres.

Quinto

Con el fin de favorecer la efectiva aplicación de los principios rectores y pautas contempladas en el Protocolo de Actuación Coordinada, el resto de las instituciones firmantes, en el ámbito de sus competencias y dentro del máximo respeto a la independencia judicial, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- a) Difundir los contenidos del Protocolo de actuación entre todas y todos los profesionales que integren o dependan de cada una de las instituciones firmantes y que estén implicados en la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres. Para ello se utilizarán los medios que se consideren más oportunos en cada caso: remisión de los contenidos de este Acuerdo y Protocolo, instrucciones, circulares, recomendaciones, guías, jornadas, talleres de sensibilización, acciones de formación, etc.
- b) Diseñar y poner en marcha planes y programas de formación especializados de carácter continuo y obligatorio sobre actuación en casos de violencia machista contra las mujeres, haciendo especial referencia a los principios y pautas contenidas en el Protocolo de Actuación Coordinada, dirigidos al conjunto de profesionales que desde los diferentes ámbitos estén implicadas e implicados en la atención a estas víctimas, tanto personal propio como personal de entidades privadas proveedoras de servicios. Esta formación será desarrollada con un triple enfoque de derechos humanos, de infancia y de género y desde una perspectiva interseccional, primando como horizonte y eje de intervención el empoderamiento de las víctimas.
- c) Contribuir al conocimiento mediante la recogida y remisión de datos e información despersonalizada en relación con la actividad de los recursos y servicios dirigidos a víctimas de violencia machista contra las mujeres que de ellas dependan, adaptando sus sistemas de información si fuera necesario, a fin de favorecer el análisis estadístico y la evaluación de estos.
- d) Habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para garantizar la efectiva aplicación de los contenidos del presente Acuerdo.

- e) Actualizar sus normativas de referencia, procedimientos de actuación y sistemas de información.
- f) Promover la innovación y la mejora continua de las actuaciones para aumentar el impacto positivo de éstas en el bienestar de las víctimas.

Sexto

A los efectos de hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de los compromisos del presente Acuerdo, se mantiene la Comisión de Seguimiento, creada en el marco del I Acuerdo, cuyas funciones son las siguientes:

- a) Proponer a las instituciones firmantes cuantas acciones se estimen convenientes en orden a mejorar la coordinación y a garantizar la aplicación efectiva de las medidas y pautas recogidas en el Protocolo de Actuación Coordinada de este Acuerdo.
- b) Realizar propuestas de actuación conjunta entre las instituciones firmantes, así como de coordinación de las intervenciones y actuaciones que afecten a varias instituciones en relación con la materia objeto de este Acuerdo.
- c) Emitir por propia iniciativa o bajo petición amparada en una norma jurídica informes relacionados con el objeto de este Acuerdo.
- d) Adoptar acuerdos relacionados con el objeto de este Acuerdo.
- e) Recibir quejas con relación al incumplimiento de las pautas establecidas en el Protocolo de Actuación Coordinada de este Acuerdo y, en su caso, proponer medidas para su subsanación.
- f) Acordar las líneas de trabajo y temas prioritarios sobre las que deberá trabajar en cada ejercicio presupuestario el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) encargado de dar apoyo técnico a la Comisión de Seguimiento.
- g) Analizar la aplicación de los contenidos del presente Acuerdo y, en particular, aprobar al final de cada ejercicio un informe de seguimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de estos. En el mismo se hará referencia a las acciones desarrolladas por cada una de las instituciones firmantes a los efectos de garantizar la efectiva aplicación de las medidas y pautas contempladas en el Protocolo de Actuación Coordinada y de mejorar la atención y protección a las víctimas, así como se incluirá una valoración del grado de cumplimiento del Protocolo de Actuación Coordinada en el ámbito de intervención de cada una de las instituciones y una evaluación conjunta de los avances y resultados de dicho protocolo. A tal fin, cada institución remitirá a la Secretaría de la Comisión un informe de seguimiento y evaluación respecto de su propio ámbito de actuación, de acuerdo con los indicadores que establezca a tal efecto el GTI, con un mes de antelación a la celebración de la reunión correspondiente de la Comisión.

- h) Acordar, en su caso, la actualización del Protocolo de Actuación Coordinada recogido en este Acuerdo, a fin de asegurar que éste se ajusta a las nuevas iniciativas o circunstancias que puedan surgir durante la vigencia del presente Acuerdo, siempre que dicha actualización no afecte a aspectos sustanciales que justifiquen la firma de un nuevo Acuerdo.
- i) Las cuestiones relacionadas con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual excederán de las funciones de esta comisión, ya que se gestionarán en el marco de la Mesa contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, que impulsa Emakunde desde 2013 con el objeto de coordinar las actuaciones en relación con esa forma específica de violencia machista contra las mujeres.
- j) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas en su ámbito de actuación.

La Comisión de Seguimiento estará presidida por la persona que ocupe la Dirección de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y además, estará compuesta por representantes con rango de Viceconsejero, Viceconsejera o similar de las siguientes instituciones firmantes:

- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de igualdad de mujeres y hombres.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de salud.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de seguridad ciudadana.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios sociales.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de inclusión social.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de empleo.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda.
- Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de educación.
- Diputación Foral de Álava.
- Diputación Foral de Bizkaia.
- Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Eudel-Asociación de Municipios Vascos.
- Consejo General del Poder Judicial.
- Ararteko.
- Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Consejo Vasco de la Abogacía.
- Consejo Médico Vasco.

Igualmente integrará la Comisión de Seguimiento la persona titular de la Secretaría General de Emakunde, quien asumirá las funciones de secretaría y gestión de esta comisión y en caso de ausencia o enfermedad las funciones de secretaría las asumirá la o el vocal más joven.

Así mismo, podrán participar en la Comisión de Seguimiento esporádicamente, cuando los temas a tratar así lo requieran, con voz y sin voto, personas expertas y miembros de organizaciones y asociaciones que agrupen o representen a personas afectadas por el objeto de este Acuerdo o que trabajen en la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres.

La Comisión de Seguimiento podrá funcionar en pleno y en subcomisiones para el estudio de temas específicos, correspondiendo al pleno el nombramiento de las personas integrantes del mismo que formarán parte de cada una de las subcomisiones. El Pleno de la Comisión celebrará al menos una sesión ordinaria al año. Además, podrá celebrar sesiones extraordinarias a iniciativa de la presidencia o a petición de dos tercios de sus integrantes. En este caso la petición habrá de realizarse por escrito y contendrá la propuesta motivada de los asuntos a tratar.

La presidencia convocará la reunión extraordinaria dentro de los quince días siguientes al de la solicitud y el orden del día incluirá necesariamente los puntos solicitados, pudiendo la presidencia adicionar otros. La Comisión, tanto en su funcionamiento en pleno como en subcomisión, quedará válidamente constituida con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, entre quienes debe encontrarse necesariamente la Presidenta o el Presidente, o, en caso de ausencia, quien le sustituya, y la Secretaria o Secretario, o, en caso de ausencia, quien le sustituya. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría simple de las personas miembros asistentes. En caso de empate decidirá el voto de la presidencia. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer prestará la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento.

Séptimo

Con el fin de prestar el apoyo técnico necesario a las y los miembros de la Comisión de Seguimiento para el correcto desempeño de sus funciones, se mantendrá el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), creado en el marco del I Acuerdo, e integrado por personas técnicas representantes de las instituciones parte en el presente Acuerdo y designadas por éstas a tal fin. En el caso de las diputaciones se designarán dos representantes, una del Órgano de Igualdad y otra del departamento competente en materia de atención a las víctimas.

Entre sus funciones cabe señalar las siguientes:

- a) Reflexionar y debatir en torno a las líneas de trabajo y temas encomendados por la Comisión de Seguimiento.
- b) Elaborar propuestas, informes técnicos y recomendaciones en torno a dichos temas para su posterior estudio y, en su caso, aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento.
- c) Impulsar la actualización del Protocolo de Actuación Coordinada y elaborar propuestas para adaptar los contenidos del mismo a las nuevas iniciativas o circunstancias que puedan surgir durante la vigencia del presente Acuerdo.
- d) Identificar y proponer temas emergentes sobre los que puede tener especial interés trabajar para someterlos a consideración por parte de la Comisión de Seguimiento.
- e) Intercambiar periódicamente información sobre la coordinación de las instituciones firmantes.
- f) Procurar un intercambio continuo y fluido de información sobre las incidencias que se identifiquen en relación con la actuación y coordinación de las instituciones firmantes a fin de agilizar su gestión.
- g) Organizar y celebrar un encuentro anual de intercambio y formación dirigido a profesionales de los diferentes ámbitos y sistemas.
- h) Elaborar un informe anual de seguimiento y evaluación de los contenidos del Acuerdo que se elevará para su aprobación a la Comisión de Seguimiento. En el mismo se hará referencia a las acciones desarrolladas por cada una de las instituciones firmantes a los efectos de garantizar la efectiva aplicación de las medidas y pautas contempladas en el Protocolo de Actuación Coordinada y de mejorar la atención y protección a las víctimas, así como se incluirá una valoración del grado de cumplimiento del Protocolo de Actuación Coordinada en el ámbito de intervención de cada una de las instituciones y una evaluación conjunta de los avances y resultados de dicho protocolo. A tal fin, cada institución remitirá a la Secretaría de la Comisión de Seguimiento un informe de seguimiento y evaluación respecto de su propio ámbito de actuación con un mes de antelación a la celebración de la reunión correspondiente de la Comisión. Así mismo, se diseñará un modelo de informe y un sistema de indicadores que le den soporte.
- i) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas en su ámbito de actuación.

El Grupo Técnico Interinstitucional podrá trabajar en pleno y en subgrupos de trabajo que se constituyan ad-hoc para abordar temas específicos que requieren mayor profundización, correspondiendo a cada institución el nombramiento de las personas que formarán parte de cada uno de los subgrupos de trabajo. Si se considera oportuno en estos grupos se podrá invitar a participar a personal experto en la materia.

Se mantendrá el Grupo de Sistemas de Información (GSI), consolidado en el marco del II Acuerdo, orientado a trabajar en torno a la mejora de la recogida y difusión de datos sobre la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres.

Bajo la coordinación de la persona que represente a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, el GTI se reunirá, al menos, dos veces al año. Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer prestará la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento del GTI.

Octavo

Se creará un Grupo de coordinación interinstitucional en cada territorio histórico, impulsado por el Órgano competente de cada Diputación, especialmente orientado a promover la toma de decisiones conjunta y coordinada ante casos de especial complejidad, garantizando un abordaje integral coherente con el enfoque de género, la perspectiva de interseccionalidad y el principio de empoderamiento.

Noveno

La entrada en vigor de este Acuerdo supone el fin de la vigencia del II Acuerdo interinstitucional suscrito en 2009.

Décimo

Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su firma y tendrá una duración de cuatro años; se podrá acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.



*EAEn emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren biktimei ematen zaien
arreta koordinatzeko erakundeen
arteko III. Akordioa*

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA
Vitoria-Gasteizen, 2023ko urtarrilaren 19an.

Sinatzaileek adierazten dute

I. Giza eskubideen urraketa bat eta erakunde publikoei esku hartzeko deialdia

Emakumeen aurkako indarkeria matxista nazioartean aitortzen da neska txikien, neska nerabeen eta emakume helduen oso kopuru handiari, beren seme-alabei eta ondorioz gizarte osoari eragiten dion giza eskubideen urraketatzat. Osasun publikoko lehen mailako gizarte-arazo kontsideratzen da eta horren aurrean erakunde publikoei ekiteko dei egiten zaie.

Ugaria da botere publikoen esku-hartzea galdatzen duen araudia nazioartean, estatu-mailan eta, noski, EAE mailan. Beste batzuen artean aipagarriak dira: Emakumearen kontrako Bereizkeria Mota Guztiak Desagerrarazteko Hitzarmena, CEDAW, 1979koa; Emakumeen kontrako Indarkeriaren eta Etxeko Indarkeriaren aurkako Borrokarako eta haiek Saihesteko Hitzarmena, 2011koa (Istanbuleko Hitzarmena); Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa; Delituaren Biktimaren Estatutuari buruzko 4/2015 Legea, apirilaren 27koa; Haurtzarorako eta Nerabazarorako Babes Sistema Aldatzeko 8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa; Genero Indarkeriaren kontrako Estatu Itunetik aurrera sortutako araudia, 2017an sinatutakoa; Askatasun Sexual Osoa Bermatzeko 10/2022 Lege Organikoa, eta Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako eta Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Gabeko Bizitzetarako 4/2005 Legea (2022ko martxoaren 3ko bigarren aldaketaren ondoren).

Hari horretatik jarraituz, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurreko erantzuna hobetzen saiatu da zenbait lege eta arau garatuz. Horien bidez neurriak bultzatu eta ezarri dira indarkeria mota hori saihestera eta deuseztatzerako bideratuta, baita biktimak babestera eta indarkeria hori tolerantziarik gabe arbuizatzerako eta horien erantzuleak zigortzerako bideratuta ere.

Otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako eta Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Gabeko Bizitzetarako 4/2005 Legeak ezartzen du emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta osoa eskaintzea eta haien errekupeazioa eta erreparazioa Euskadiko botere publikoentzako lehentasuna izatea.

II. Desberdinkeria jatorri duen arazo estrukturala

Erreferente den araudiak aitortzen du emakumeen aurkako indarkeria matxista botere-harreman desorekatuen eta emakumeen bereizkeriaren adierazpena dela, eta, gainera, indarkeria mota horrek generoaren arabera desberdinkeria estrukturalak betikotzeko funtzioa duela.

Horrez gain, indarkeria hori desberdinkeriaren eta emakumeen eta gizonen arteko botere-harreman asimetrikoen ondorio da, hala nola, soldata-arrakala, txirotasunaren feminizazioa eta erabakiak hartzen diren esparruetan emakumeen ordezkari falta. Indarkeria hori emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeriaren adierazpenik muturrekoena da eta, beraz, berdintasunerantz egiten diren aurrerapauso orokorrak emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko bidean ere aurrerapenak dira.

Emakumeek gizarte-egitura matxistaren barnean, bizitzako hainbat esparrutan pairatzen duten indarkeria estruktural eta sistemiko gisa definitzen da. Hori dela eta, nahiz eta pertsona zehatzei harreman pribatuetan gertatu, gizarte-antolakuntzarekin lotuta dago eta gizartean eta familian sexuaren arabera betetzen diren eginkizunen eta arduren banaketa tradizionalan funtsatzen da, zeinetan emakumeak gizonen menpeko lekua duten.

Emakumeen aurkako indarkeriaren erroak emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria historikoan eta sektore publiko nahiz pribatuan emakumeen bereizkeria orokortuan daude. Botere desberdintasunek, bereizkeriazko gizarte-arauek eta desberdinkeria ekonomikoek emakumeen giza eskubideak ahultzen dituzte eta indarkeria betikotzen dute. Emakumeen aurkako indarkeriaren arazoa ez da erasoetara mugatzen, indarkeria pribilegioez baliatzen den harremanak izateko modu bat da, harremanetako asimetria hori mantentzeko eta emakumeak menderatzeko erabiltzen dena. Zentzu horretan, desberdinkeria hori mantentzeko, errepikatzeko eta betikotzeko balio duen gizarte-kontrolerako tresna ere bada, emakumeen eta gizonen arteko botere-harreman asimetrikoen ondorio eta sortzaile baita aldi berean.

Indarkeria mota hori ez da kultura, erlijio edo herrialde zehatz batera mugatzen, ezta gizarte baten barruko emakume-talde zehatzetara ere. Nahiz eta emakume batzuen eta besteen egoera oso ezberdina izan (neska txikiak, emakume afrikarrak, asiarrak, latinoamerikarrak, europarrak, gazteak, helduak, adinekoak, soldatapekoak, langabeak...) gizonen aldean gutxiagotasun- eta menpekotasun-egoera dute komunean, zeharo adierazpen ezberdinetan mamitzen dena.

Indarkeria hori emakume guztien ongizateko eta bizi-kalitateko maila askotan ondorio larriak dituen gizarte-arazo bat da. Alabaina, adinak, nazionalitateak, jatorri edo estratu kulturalak, desgaitasunak, emakume migratzaileen kasuan bizilekuaren administrazio-egoerak, txirotasunak edo autonomia ekonomiko faltak, elkarrekin gurutzatzen diren beste faktore batzuekin batera, eragina dute indarkeria-egoerak areagotzean eta emakume askok beren herritar-eskubideak eraginkortasunez baliatzeko desabantailak izatean.

III. Koordinazioarako aurreko akordioetako lorpenak

Emakumeen aurkako indarkeria matxistak botere publiko guztiek esfortzuak bateratzea eskatzen duen dimentsio anitzeko arazoa da eta horri erantzuteko erakunde-maila guztietako eragile anitzen arteko akordioak, konpromisoak eta koordinazioa behar dira. Azken 20 urteetan EAEEn noranzko horretan pauso garrantzitsuak eman dira¹.

2001ean euskal administrazio publikoak berdintasun-politiketan hamarkada batean baino gehiagoan egindako lanean oinarritutako *"Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera egiteko erakundeen arteko I. Akordioa"* sinatu zen. EAEEn eta erkidegotik kanpo ekimen aitzindaria izan zen. Emakumeen aurkako bereizkeriaren, desberdinkeriaren eta indarkeriaren arteko lotura zuzena azpimarratu zen bertan, artean gaur egun ditugun erreferentziatzko legeen oinarriak argitaratu ez zen garai batean. Akordioa sinatzeak lehen aldiz etxeko tratu txarretan eta eraso sexualetan esku hartzen zuten hainbat erakunde konprometitu zituen gai horretan eta, gainera, prozedurak edo jarduketak EAE osoan ekiteko pautak homogeneo batzuetara moldatzea adostu zuten dokumentuko esku-hartze esparru bakoitzerako (osasuna, gizarte-zerbitzuak, segurtasuna eta justizia). Era berean, akordioari esker emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arloko gai zehatzen inguruan elkarlana erraztu duten profesionalen arteko aldizkako harremanak ahalbideratzeko espazioak sortu ziren.

Akordioan jasotako pautek hurrengo akordioaren oinarria ezarri zuten eta EAE osoan zabaldu ziren tokiko protokolo guztietarako ezinbesteko erreferentzia eta inspirazio iturri ere izan ziren. Indarrean egon zen zortzi urteetan indarkeria-egoerei aurre egiten dieten emakumeei eskaini beharreko zerbitzu eta baliabideetan funtsezko aldaketak eskatzen zituzten lege ugari promulgatu ziren. Testuinguru horretan ezinbestekoa zen akordioaren edukiak egokitzea eta horregatik *"Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa"* sinatu zen 2009an.

II. akordioa indarrean jarri zenetik erakundeen arteko koordinazio-eredua zabaldu, indartu eta garatu da. Akordio berriak eragin hauek izan zituen, beste batzuen artean: etxeko tratu txarrek eta indarkeria sexualak eragindako heriotzen aurrean erantzun instituzional koordinatua emateko prozedura moldatzea; haurrak genero-indarkeriaren biktimea zuzen aitortzearen inguruko hausnarketa bultzatzea horri dagokion araudia onartu aurretik; emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei datu pertsonalen tratamenduaren inguruko lan egitea, eta EDEKArekin elkarlanean desgaitasundun emakumeei ematen zaizkien erantzunak hobetzea bultzatzea onartutako printzipioak jarraituz. Nabarmenezkoa da indarkeria jasaten duten emakumeei egoera horren aurrean erantzuna ematen parte hartzen duten profesionalen formakuntzari dagokion diagnostiko-prozesua. Prozesu horretatik aurrera diseinatu eta bultzatu zen esparru eta sistema guztietako profesionalen formakuntza espezializaturako Jabetuz Programa.

¹ Zehaztasun gehiago dituen txosten bat kontsulta daiteke hemen: https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_guias/es_def/adjuntos/dossier_20_anos_camino_recorrido.pdf

Bai I. akordioa, bai II.a aurrerapauso ukazina izan dira emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean euskal erakundeen erantzuna hobetzeko eta honen tamainako arazo batek eskatzen duen erakundeen arteko elkarlan biziagoa eta egonkorragoa izateko oinarria prestatu dute. Indarkeria jasaten duten emakumeei arreta emateko EAE osoan zabaltzen diren zerbitzu eta baliabideen sarea nolabait antolatzea ahalbideratu dute. Horrela, erakundeen arteko lana protokoloan jasotzeko erremintak izateak emakumeek sistema guztietara duten sarbidea hobetzen du. Formakuntzan egindako hobekuntzek hainbat esparrutatik emakumeen aurkako indarkeria-egoeren detekzio goiztiarra hobetzen lagundu dute eta zerbitzuen arteko bideraketarako mesedegarria izan da.

IV. Araudian aldaketak 2009tik

2009tik gai horretan esku-hartzearekin lotutako gertaera legegile garrantzitsuak egon direnez, II. Akordioako edukiak eguneratzeko beharra sortu da, baita protokoloak, elkarlanerako akordioak eta ordutik onartutako koordinaziorako beste tresna mota batzuk berrikusteko beharra ere.

Europako Kontseiluko Emakumeen kontrako Indarkeriaren eta Etxeko Indarkeriaren aurkako Borrokarako eta haien Saihesteko Hitzarmena, 2011ko maiatzaren 11n Istanbulen adostutakoa, 2014tik loteslea dena eta indarrean dagoena, European emakumeen kontrako indarkeriaren arloan derrigorrezkoa den lehenengo tresna da eta indarkeria saihesteko, biktimek babesteko eta erantzuleak epaitzeko orain arte ezarritako garrantzi handieneko konpromisoa. Emakumeen kontrako indarkeria giza eskubideen urraketa larria dela aitortzen du eta emakumeen aurkako indarkeriaren ikuspegian 1/2004 Lege Organikoak eskaintzen duen genero-indarkeriaren definizioa zabaltzeko beharra adierazten du. Hitzarmena sinatzean hartutako konpromisoen jarraipena egiteko Emakumeen kontrako indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren aurka borrokatzeko adituen taldea (GREVIO) izenekoak sortu zen. Taldeak arlo horretako politiketarako oso interesgarriak diren gomendio orokorrak ematen ditu.

Estatu-mailan, zigor-kodea aldatzen duen martxoaren 30eko 1/2015 Legearen onarpena azpimarratu behar da, arauan genero kontzeptua bereizkeria larrigarri gisa gehitu, kondena urratze delitua erantsi eta ezkontza behartua tipifikatu zuena. Urte horretan bertan Biktimaren Estatutuko apirilaren 27ko 4/2015 Legeak prozesu penalean biktimen eskubideen aitortpena aurreratu zuen, baita babesa eta kalte-ordainketa jasotzeko eskubidea ere.

Era berean, Haurtzarorako eta Nerabezarorako Babes Sistema Aldatzeko 8/2015 Lege Organikoak, uztailearen 22koak, eta Haurtzarorako eta Nerabezarorako Babes Sistema Aldatzeko 26/2015 Legeak, uztailearen 22koak, genero-indarkeria edo etxeko indarkeria dagoen testuinguruetako adingabeak biktima aitortu zituzten laguntza eskaintzen duten zerbitzuetara sarbidea bermatzeko, baita babesteko neurri egokietara ere.

2017an sinatutako Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Ituna ere aipagarria da. Horrek genero-indarkeriari erakundeek ematen dioten erantzuna hobetzeko konpromisoa eta neurri zehatzak planteatu zituen 1/2004 Lege Organikoan definitzen den bezala, eta beste indarkeria era batzuk, esate baterako esplotazio sexualerako emakumeak salerostea, klitoriaren ablazioa eta ezkontza behartua, ikusaraztea eta artatzea hobetzeko ere bai. Itun horretatik aurrera Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Ituna Garatzeko Presako Neurrien 9/2018 Errege Lege

Dekretua, abuztuaren 3koa, bezalako arau batzuk onartu dira. Lege horretan, beste neurri batzuen artean, indarkeriaren biktimei arreta emateko zerbitzuek indarkeriaren biktima egoera era administratiboan egiaztatzeko erak zabaldu ziren (indarkeria-egoeren egiaztapenari buruzko 2021eko azaroaren 11ko Berdintasun Sektoreko Konferentziako Akordioa argitaratzen duen Berdintasunaren aldeko eta Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Idazkaritzaren abenduaren 2ko Ebazpena). Lege Dekretu horrek arau askotan aldaketak ekarri ditu, adibidez biktimentzako gizarte-laguntzei buruzko Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoaren, abenduaren 28koaren, 27. artikuluko 2. eta 5. atalean, eta datorren urteetan estatu-mailako arau-esparrua garatzen jarraitzea itun horrekin lotuta.

Bere aldetik, Genero Indarkeriaren arloan estatu itunean aplikatzen diren presazko neurriei buruzko Botere Judizialaren 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, erreformatzen duen 5/2018 Lege Organikoa, abenduaren 28koak, beste aldaketa batzuen artean, hainbat esparrutan genero-indarkerian formakuntza gehitu zuen, adibidez sarbidea izateko karrera judizialera edo emakumearen aurkako indarkeriarako epaitegi espezializatueta sartzeko espezializaziora.

Ezgaitze judizialdun desgaitasuna duten pertsonen esterilizazio indartua edo adostasunik gabekoa ezabatzeko zigor-kodea aldatzen duen 2/2020 Lege Organikoa, abenduaren 16koa, eta desgaitasuna duten pertsonen gaitasun juridikoa erabiltzen laguntzeko legedia zibila eta prozesala erreformatzen duen 8/2021 Legea, ekainaren 2koa. Horrek desgaitasuna duten haurrak eta nerabeak edo erabakiak hartzeko laguntza behar duten adin nagusikoak babesteko neurriak gehitzen ditu etxeko indarkeria edo genero-indarkeria testuingurua duten banaketa- edo dibortzio-egoeretan.

Indarkeriaren aurrean haurrak eta nerabeak babesteko 8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, 11. artikulua zuen adingabeak edozein biolentzia motaren aurrean babesteko — horien artean baterako familia-ingurunekoa, genero-indarkeria, pertsonen salerosketa eta trafikoa eta klitoriaren ablazioa— administrazio-jardunerako printzipio gidari gisa. Gainera, askatasun sexualaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitua, pertsonen salerosketa edo adingabeen esplotazio delitua izan litekeen egintza baten jakitun diren pertsona guztiek Fiskaltzari jakinarazteko betebeharra ezarri zuen.

Askatasun sexuala bermatzeko 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, ezartzen du administrazio publikoek indarkeria sexualaren biktimei arreta osoa eskaintzen duten zerbitzuak eskaini behar dituztela egunean 24 orduz, zeinek barne hartzen dituen lagun egitea, arreta psikologikoa, juridikoa eta soziala.

EAEn esparruan, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako eta Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Gabeko Bizitzetarako 4/2005 Legeak hori aldatzeko martxoaren 3ko 1/2022 Legearen bidez txertatutako aldaketen ondoren indarrean dagoen bertsio bateratuan, lege-esparrua testuinguru sozial eta legegile berrira moldatzen du, batez ere aipatutako Istanbulako akordiora. Azpimarragarria da, euskal botere publikoen egintzan duen garrantziagatik, biolentziaren esparruan burututako aldaketa. Zehazki *"VII. kapitulua emakumeen aurkako indarkeria"* deiturikoa gai honetako legedian mugarri da.

Arau horrek, EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako Planekin bat etorriz, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurreko erantzun instituzionala berdintasun politketan kokatzen du. Berritasun adierazgarrienen artean nabarmentzen da: kontzeptualizazioan kontuan hartzen diren indarkeria erak eta motak zabaltzen ditu (1/2004 Lege Organikoan definitzen den genero-indarkeria baino haratago) eta zuzenbidearen subjektuaren esparrua era bai (emakumeez gain biktima kontsideratzen ditu haurrak, nerabeak eta indarkeria dagoen testuinguru batean dauden beste menpeko pertsonak haien egoera zaurgarriatik indarkeria horrek zuzenean eragiten badie); interseksionalitateari eta arreta pertsonalizatzeari arreta handiagoa jarri behar zaiela azpimarratzen du; eta birbiktimizazioa ekidin behar dela eta biktimen eskubideak eta ahalduntzea hark prozedura judizialean duen inplikazio-maila kontuan hartu gabe, esku-hartzearen erdialdean jarri behar direla nabarmentzen du.

54.6. artikuluan detekzio goiztiarrak duen garrantziaz hitz egiten da eta aldarrikatzen da euskal administrazio publikoek, haien esparruko eskumenekin, ziurtatu behar dutela hezkuntza-, osasun- eta lan-esparruetako, esparru polizialeko, judizialeko eta sozialeko profesionalek era proaktiboan lan egiten dutela esplizitatu gabeko emakumeen aurkako indarkeria kasuak detektatzeko eta era egokian bideratzeko. Hori lortzeko, ziurtatu behar dute esku hartzen duten erakundeek era koordinatuan landutako adierazleak eta dagozkien ekintzarako pautak dituzten protokoloak existitzen direla eta aplikatzen direla.

Horrela, arazoa era integralago batean lantzen eta kalitate handiagoko erantzunak ematen saiatzeko, 62. artikuluan ezartzen du autonomia erkidegoko administrazioak, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen bidez, gaian eskumenak dituzten gainerako euskal administrazio publikoekin batera erakundeen arteko kolaborazio akordioak eguneratzea bultzatu behar dituztela, detekzio goiztiarrari eta emakumeen aurkako indarkeria matxista kasuen aurrean era koordinatuan eta eraginkorrean ekiteari mesede egiteko eta indarkeria horren biktimei kalitatezko laguntza osoa bermatzeko. Era horretan, gaian eskumenak dituzten gainerako erakundeekin kolaboratzeko formulak bultzatu behar dira.

Hain zuzen 2009ko erakundeen arteko II. Akordioaren edukiak batez ere lehen aipatutako aldaketa legeetatik datozen inguruabar berrietara moldatzeko eta ordutik aurrera onartutako protokoloak, kolaboraziorako akordioak eta beste tresna juridiko mota batzuk osatzeko, erakundeen arteko III. Akordio hau sinatzea planteatzen da, garatu daitekeen esparru-akordio gisa, esku-hartzeko esparru bakoitzera zehazten eta moldatzen dena.

V. Azken urteetako aldaketa sozialak

Azken urteetan izandako aldaketa sozialek indarkeria era batzuek garrantzi handiagoa hartzea ekarri dute, baita emakumeen aurkako indarkeria matxista eragiteko era berriak sortzea ere. Testuinguru horretan garrantzi berezia du detekziora eta protokoloak berrikustera bideratutako esfortzua areagotzeak.

Gizarteak harremanak izateko eta komunikatzeko moduetan aldaketa iraultzailea izan du informazioaren teknologien erabilera eta Interneten, sare sozialen eta gailu mugikorren garapena dela eta. Teknologia horien erabileraren zabalkuntzak alde batetik, zenbait abusu-arrisku areagotu ditu, esate baterako sextingak (mugikor edo Internet bidez sexualak edo erotikoak diren irudiak edo bestelako edukiak zabaltzeak) dakartzanak eta bestalde, indarkeria era berriak sortu ditu, adibidez groominga (helduek adingabeei informazioa eta Internet bidez lortutako irudiak hertsatzeko erabiliz egiten dieten sexu-abusua), ziberkontrola, ziberjazarpen sexual sexista (sarean emakumeak iraintzen dituzten jarrera errepikatuak eta baimenik gabekoak, biktimaren bizitzan nahasiz), etab., izan ere, erreza da horietara sarbidea izatea eta haietan erasotzaileek pribatutasuna eta zigorgabetasuna izaten dute.

Indarkeriarako teknologia berriez baliatzeak emakumeen kontrako indarkeria larritzea dakar testuinguru batzuetan, hala nola bikoteen edo bikote ohien harremanetan, batez ere nerabeen eta gazteen kasuan. Ziberrindarkeria era horiek matxismoa errepikatzen badute ere ezkutuan daude eta askotan ez dira zalantzan jartzen eta ez zaie aurre egiten. GREVIOren 1. gomendio orokorra, hain zuzen, emakumeen aurkako indarkeriaren alderdi digitalari buruzkoa da.

Horrez gain, geroz eta ikusgarriago egin dira gizon-taldeek emakumeei egindako eraso sexualak eta "sumisio kimiko" deiturikoaren bidezkoak, biktimaren borondatea ezeztatzen duten sustantziak eta psikofarmakoak erabiliz burututakoak. Indarkeria mota horiek gizartean eragin handia izan dute eragin duten haserrea eta gizarte-salaketa kontuan hartuta.

Horrela, emakumeen aurkako indarkeria matxistatzat hartu behar da emakumeei min emateko beren gertuko inguruneko edo ingurune afektiboko pertsonen kontra erabiltzen den indarkeria, batez ere seme-alaben kontra. Indarkeria mota hori "indarkeria bikario" izenez ezagutzen da.

Aldaketa sozialen artean aipagarriak dira migrazio-prozesuen hazkundearekin lotutako gizarte eta demografia aldaketak; batez ere emakumeei, gazteei eta migratzaileei eragiten dieten txirotasun eta gizarte-bazterketa tasen hazkundera; gizarte-inklusio lanaren eginkizunaren eboluzioa, biztanleriaren zahartzea eta adinekoen zaurgarritasuna, etab. Erabakigarria da konplexu bihurtzen den emakume batzuen errekupeazio-prozesuan faktore guzti horien eragina kontuan hartzea.

Bestalde, berdintasun handiagoa lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxista ezabatzekeo aldarrikapenek eta erakunde feministek eragin soziopolitikorako ahalmena irabazi dute eta gizarteak botere publikoei esfortzu handiagoa egiteko eskatzen die.

Azaldutako guztia dela eta, parte hartzen duten alderdiek, daukaten ordezkartzan,

Hitzartzen dute

Lehenengoa

Akordio honen objektua EAEEn emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arretan esku hartzen duten erakundeen artean ahal den koordinazio handiena eta hoberena lortzea da, azken helburua biktimei ematen zaien arreta hobetzea eta indarkeria matxistarik gabeko bizitza on bat lortzen laguntzea izanik. Horretarako, behar diren pautak onartuko dira EAEEn jardun homogeneousoa eta kalitatezko arreta integrala bermatzeko osasun-, hezkuntza-, etxebizitza- eta lan-esparruetan, gizarte-zerbitzuen esparruan, esparru polizialean eta judizialean.

Bigarrena

Dokumentua izenpetzen duten erakundeek *"emakumeen aurkako indarkeria matxista"* terminologia adosten dute otsailaren 18ko Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Gabeko Bizitzetarako 4/2005 Legearekin bat etorriz.

Akordioaren ondoretarako emakumeen aurkako indarkeria matxista bezala ulertzen da aipatutako legean ezarritakoa: *"Emakume izateagatik emakumeen kontra baliatzen den indarkeria oro hartzen du, neska txikien, neska nerabeen eta emakume transexualen kontra egiten dena barne, edo neurritz kanpo eragiten dien indarkeria, bai eremu publikoan, bai pribatuan"*.

"Indarkeria egitezkoa zein ez-egitezkoa izan daiteke, eta bitartekoak izan daitezke fisikoak, psikologikoak edo ekonomikoak, mehatxuak, larderia eta hertsapena barne, baldin eta horien ondorioa min, sufrimendu edo kalte fisikoa, sexuala, psikologikoa, soziala, sozioekonomikoa edo ondarearekin lotutakoa bada".

"Emakumeen kontrako indarkeria matxista dira bikotekidearen edo bikotekide ohiaren kontrako indarkeria, familia-indarkeria, sexu-indarkeria, feminizidioa, emakumeen eta neska txikien salerosketa, sexu-esplotazioa, emakumeen genitalen mutilazioa, behartutako ezkontzak eta beste jardun tradizional kaltegarri batzuk, hertsapena edo askatasun-gabetze arbitrarioa, tortura, indarkeria instituzionala, jazarpena, genero-indarkeria politikoa, indarkeria digitala eta sare sozialetakoa, obstetrikoa, sexu- eta ugalketa-eskubideak urratzea, eta emakumeen edo neska txikien duintasuna, segurtasuna edo askatasuna urratzen duen edo urra dezakeen beste edozein indarkeria mota, baldin eta nazioarteko tratatuetan, Espainiako Zigor Kodean edo Estatuko edo Autonomia Erkidegoko araudietan jasota badago. Hori guztia, kontuan izan gabe alor publikoan edo pribatuan gertatzen den; horren barnean sartzen dira, besteak beste, eremu hauek: familia, lana, hezkuntza, osasuna, kirola, komunitatea, komunikabideak, aisialdi- eta jai-espazioak eta eremu birtuala".

"Halaber, emakumeen aurkako indarkeria matxistatzen jotzen da biktimek babesten dituzten pertsonen aurka egiten den indarkeria, bai eta haien hurbileko ingurunearen edo ingurune afektiboaren aurka egiten dena ere, bereziki seme-alaben edo beste senide batzuen aurkakoa, emakumea atsekabetzeko borondatez".

Arau horren arabera *"generoagatiko indarkeria-jarrerak zuzenean pairatzen dituzten emakume, neska nerabe eta neska txikiez gainera, emakumearen kontrako indarkeriaren biktimatzat jotzen dira espresuki haurrak, nerabeak eta mendeko beste pertsona batzuk, baldin eta indarkeria hori gauzatzen den ingurune batean bizi badira eta, beren zaurgarritasun-egoera dela-eta, indarkeria horrek zuzenean eragin badiezaieke".*

"Biktima" kontzeptuak errekupeazio-prozesu bat hasi duten bizirik irteerako pertsonak ere barne hartzen ditu, nazioarteko itunetan eta gaiari buruzko testu legeletan ezartzen denarekin bat eginez.

Era berean, Askatasun sexuala bermatzeko 10/2022 Lege Organikoak, irailaren 6koak, ezartzen du indarkeria sexualak honela ulertu behar direla: *"izaera sexuala duen edozein ekimen, onartua ez dena edota bizi sexualaren garapen askea baldintzatzen duena, edozein eremutan, publiko zein pribatuan, baita eremu digitalean ere"*. Dena den, zigor-kodeko azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoko II. liburuaren VIII. tituluan aurreikusten diren delituak indarkeria sexualtzat hartzen dira.

Indarkeriaren kontzeptualizazio hori hartzeak esan nahi du Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoko ekintza-esparrua zabaltzea, baita II. akordiokoa ere; izan ere, emakumeen kontrako indarkeriaren beste adierazpen eta era batzuk kontuan hartzen dira emakumeei zuzenduta bikoteak edo bikote izandakoak erabilitakoaz, familia-esparruan beste familiarterako batek erabilitakoaz eta esparru horretatik kanpoko indarkeria sexualaz gain. Indarkeria era horiek, aurreko koordinaziorako akordioetan landuz joan direnak, arretagune nagusi izaten jarraituko dute lortutako aurrerapausoak finkatzeko.

Akordio hau sinatzen duten alderdi guztiak, haien eskumenak zeharo errespetatuz, bereziki independentzia judiziala, instituzioen arteko koordinaziorako eta elkarlanerako jarduketak emakumeen aurkako indarkeriaren kontzeptualizazio horrekin bateratzen joango dira eta akordioaren esparru subjektiboa aplikatuz, indarkeria matxista era guztietako biktimei erantzun egokia eman diezaieten.

Hirugarrena

Akordioa izenpetzen duten erakundeak emakumeen aurkako indarkeria matxista egoeretan jarduketa-printzipio gidariak eta akordio honetan gehitzen den Jarduketa Koordinaturako Protokoloa jarraituz moldatzeko konpromisoa hartzen dute; guzti hori beren eskumenak zeharo errespetatuz, bereziki independentzia judiziala.

Laugarrena

Jarduketa Koordinaturako Protokoloan aurreikusitako printzipioak eta pautak eraginkortasunez aplikatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lehendakariak horren edukiak emakumeen aurkako indarkeria matxista egoeretatik datozen arau-hauste penalak pertsegitzean esku-hartzen duten epaile guztien artean zabalduko ditu.

Bosgarrena

Jarduketa Koordinaturako Protokoloan aurreikusitako printzipioak eta pautak eraginkortasunez aplikatzeko, gainerako erakunde sinatzaileek, haien eskumenen esparruan eta independentzia judiziala zeharo errespetatuz, hurrengo jarduketak egingo dituzte:

- a) Jarduketa protokoloaren edukiak zabaltzea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta ematen esku-hartzen duten erakunde sinatzaileak osatzen dituzten edo haien menpe dauden profesional guztien artean. Horretarako kasu bakoitzean egoki irizten diren baliabideak erabiliko dira: akordio eta protokolo honetako edukien igorpena, jarraibideak, zirkularrak, gomendioak, gidak, jardunaldiak, sentsibilizazio tailerrak, formakuntza-ekintzak, etab.
- b) Espezializatutako derrigorrezko formakuntza plan eta programa jarraituak diseinatzea eta martxan jartzea, Jarduketa Koordinaturako Protokoloko printzipioak eta pautak bereziki aipatuz, emakumeen aurkako indarkeria matxista kasuen aurreko jarduketarako biktima horiei arreta ematean bakoitzak bere esparrutik esku hartzen duten profesionalen zuzendutakoak, bai langile propioei bai zerbitzuak ematen dituzten erakunde pribatuetako langileei. Formakuntza hori giza eskubideak, haurtzarora eta generoa kontuan hartzen dituen ikusmolde hirukoitz batekin garatuko da ikuspuntu intersektional batetik aurrera eta biktimen ahalduntzea esku-hartzeko aukera eta ardatz nagusi izanik.
- c) Jakintza garatzen laguntzea emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako baliabide eta zerbitzuen jardueraren inguruko despertsonalizatutako beren erabiltzaileen datuak eta informazioa jasoz eta bidaliz, beharrezkoa balitz beren informazio-sistemak moldatuz analisi estatistikoa eta informazioaren eta datuen ebaluazioari mesede egiteko.
- d) Akordio honetako edukiak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko beharrezko giza baliabideak, materialak eta teknikariak prestatzea.

- e) Erreferentziarako araudiak, jarduteko prozedurak eta informazio-sistemak eguneratzea.
- f) Jarduketetan berrikuntza eta etengabeko hobekuntza bultzatzea horiek biktimen ongizatean duten eragin baikorra handitzeko.

Seigarrena

Akordio honetako konpromisoen gauzatzearen jarraipena eta ebaluazioa egiteko, I. akordioaren esparruan sortutako jarraipen-batzordea mantentzen da honako funtzio hauekin:

- a) Erakunde sinatzaileei egokitzat hartzen diren beste ekintza proposatzea koordinazioa hobetzeko eta akordio honetako Jarduketa Koordinaturako Protokoloan biltzen diren neurri eta pautak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko.
- b) Erakunde sinatzaileen artean jarduketa proposamen bateratuak egitea, baita akordio honen objektuarekin lotutako hainbat erakunderi eragiten dieten esku-hartzeak eta ekintzak koordinatzea ere.
- c) Akordioaren objektuarekin lotutako txostenak egitea beren erabakiz edo arau juridiko baten babesean hala eskatuta.
- d) Akordioaren objektuarekin lotutako akordioak egitea.
- e) Jarduketa Koordinaturako Protokoloan ezarritako pautak ez betetzeari buruzko keak jasotzea eta, hala badagokio, hori zuzentzeko neurriak proposatzea.
- f) Jarraipen-batzordeari laguntza teknikoa emateko ardura duen Erakundeen Arteko Talde Teknikoak (EATTak) aurrekontu-ekitaldi bakoitzean landu beharko dituen lan-ildoak eta premiazko gaiak adostea.
- g) Akordio honetako edukien aplikazioa aztertzea eta, bereziki, ekitaldi bakoitzaren amaieran horien betetze-mailaren jarraipenaren eta ebaluazioaren txosten bat onartzea. Txostenean erakunde sinatzaile bakoitzak Jarduketa Koordinaturako Protokoloan aurreikusten diren neurriak eta pautak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko eta biktimen arreta eta babesa hobetzeko garatutako ekintzei erreferentzia egingo zaie eta, horrez gain, erakunde bakoitzak bere esku-hartze esparruko Jarduketa Koordinaturako Protokoloak betetze-mailaren balorazio bat eta protokolo horrekin lotutako aurrerapausoen eta emaitzen ebaluazio bateratu bat gehituko dira. Horretarako, erakunde bakoitzak jarraipen-batzordearen idazkaritzan bere esku-hartze esparruari buruzko jarraipen- eta ebaluazio-txosten bat bidaliko du, EATTak horretarako ezarritako adierazleei jarraituz, dagokion batzordearen bilera baino hilabete bat lehenago.

- h) Hala badagokio, akordio honetan jasotako Jarduketa Koordinaturako Protokoloa eguneratzea adostea akordio hau indarrean dagoen bitartean sor daitezkeen ekimen edo inguruabar berrietara egokitzen dela ziurtatzeko, betiere eguneraketak akordio berri bat sinatzea justifikatzen duten funtsezko alderdiei eragiten ez badie.
- i) Esplotazio sexualerako emakumeen eta neska txikien salerosketarekin lotutako auziek batzorde honen funtzioak gainditzen dituzte, izan ere, Emakundek 2013tik emakumeen aurkako indarkeria matxista mota zehatz horrekin lotutako jarduketak koordinatzeko bultzatzen duen Sexu-esplotazioa Helburu duen Emakume eta Nesken Salerosketaren kontrako Mahaiaren esparruan kudeatuko dira.
- j) Bere ekintza-esparruan ematen zaion beste zeinahi funtzio.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen zuzendaria izango da jarraipen-batzordearen buru eta, gainera, kontseilariorde-maila edo antzekoren bat duten hurrengo erakunde sinatzaileetako ordezkarietaz osatuta egongo da:

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Osasun-arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Herritarren segurtasunean eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Justizia-arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Gizarte-inklusioaren arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Lan-arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Etxebizitza-arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Hezkuntza-arloan eskumena duen Eusko Jurlaritzaren saila.
- Arabako Foru Aldundia.
- Bizkaiko Foru Aldundia.
- Gipuzkoako Foru Aldundia.
- EUDEL - Euskadiko Udalen Elkarte.
- Botere Nagusiaren Kontseilu Judiziala.
- Ararteko.
- Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusia.
- Legelarien Euskal Kontseilua.
- Euskadiko Sendagileen Kontseilua.

Era berean, jarraipen-batzordea osatuko du Emakundeko Idazkaritza Nagusiko titularrak, zeinek idazkaritzako funtzioak eta batzordea kudeatzeko funtzioak izango dituen eta absentzia- edo gaixotasun-egoeretan, funtzio horiek batzordekide gazteenak beteko ditu.

Modu horretan, noizean behin jarraipen-batzordean parte ahalko dute, landu beharreko gaiak hori eskatzen dutenean, hitza bai baina botorik ez dutela, akordioaren objektuaren eraginpeko pertsonak elkartzen edo ordezkatzeko dituzten, edo emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta ematen lan egiten duten erakundeetako eta elkarteetako aditu eta kideek.

Jarraipen-batzordeak osoko bilkuretan eta azpibatzerdeetan funtzionatu ahalko du gai zehatzak aztertzeko, horrela, osoko bilkurari dagokio bertako pertsonetatik azpibatzerde bakoitza osatuko duten pertsonak izendatzea. Batzordearen osoko bilkurak gutxienez urtean ohiko bilkura bat izango du. Gainera, lehendakaritzak erabakita edo parte-hartzaileen bi herrenek eskatuz gero, bilkura bereziak egin ahal izango ditu. Bigarren kasu horretan, eskaera idatziz egin behar da eta landu beharreko gaien proposamen arrazoitua izango du.

Lehendakaritzak bilera berezia eskaera egiten denetik hurrengo hamabost egunetako tartean deituko du bilera berezia eta gai-zerrendak derrigorrez eskatutako puntuak izango ditu, lehendakaritzak puntu gehiago gehi ditzakeelarik. Batzordeak, nahiz osoko bilkuran nahiz azpibatzerdeetan funtzionatuz, baliozko osaera izateko kideen gehiengo osoaren asistentzia izan beharko du eta horien artean derrigorrez egon behar dira lehendakaria, edo absente egonez gero haren ordezkaria, eta idazkaria, edo absente egonez gero haren ordezkaria. Batzordeak bertaratutako kideen gehiengo soilarekin lortuko ditu akordioak. Berdinketa gertatzen bada lehendakaritzaren botoak erabakiko du. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak aurkeztuko du jarraipen-batzordearen funtzionamendurako beharrezko laguntza tekniko eta administratiboa.

Zazpigarrena

Jarraipen-batzordeari bere funtzioak ondo betetzeko laguntza teknikoa emateko, I. akordioaren esparruan sortu zen Erakundeen Arteko Talde Teknikoa (EATT) mantenduko da. Talde hori akordio honetan parte hartzen duten erakundeen ordezkari diren eta erakundeek horretarako aukeratu dituzten teknikariek osatzen dute. Foru aldundien kasuan bi ordezkari aukeratu ziren, bata Berdintasun Organokoa eta bestea biktimei arreta emateko eskumena duen sailekoa.

Betetzen dituen funtzioen artean hauek azpimarra daitezke:

- a) Lan-ildoen eta jarraipen-batzordearen arduraren gaien inguruan hausnartzea eta eztabaidatzea.
- b) Gai horien inguruko proposamenak, txosten teknikoak eta gomendioak egitea geroago aztertzeko eta, hala badagokio, jarraipen-batzordeak onartzeko.
- c) Jarduketa Koordinaturako Protokoloa eguneratzea bultzatzea, baita horren edukiak akordio hau indarrean dagoen bitartean sor daitezkeen ekimen edo inguruabar berrietara egokitzea ere.
- d) Jarraipen-batzordeak kontuan hartzeko interes berezia duten eta agertuz doazen gai berriak identifikatzea eta proposatzea.
- e) Erakunde sinatzaileen koordinaziorako aldizka informazioa eskualdatzea.
- f) Erakunde sinatzaileen jardueraren eta koordinazioaren inguruan identifikatzen diren gorabeheren buruzko informazioa etengabe eta jariatortasunez partekatzen saiatzea horien kudeaketa arintzeko.
- g) Hartu-emanetarako eta formakuntzarako hainbat esparru eta sistematako profesionalen zuzendutako urteroko topaketa bat antolatzea.
- h) Akordioaren edukien jarraipenerako eta ebaluaziorako urteroko txosten bat egitea, jarraipen-batzordeari onar dezan aurkeztuko zaiona. Txostenean erakunde sinatzaile bakoitzak Jarduketa Koordinaturako Protokoloan aurreikusten diren neurriak eta paletak eraginkortasunez aplikatzen direla bermatzeko eta biktimen arreta eta babesa hobetzeko garatutako ekintzei erreferentzia egingo zaie eta, horrez gain, erakunde bakoitzak bere esku-hartze esparruko Jarduketa Koordinaturako Protokoloak betetze-mailaren balorazio bat eta protokolo horrekin lotutako aurrerapausoen eta emaitzen ebaluazio bateratu bat gehituko dira. Horretarako, erakunde bakoitzak jarraipen-batzordearen idazkaritzan bere esku-hartze esparruari buruzko jarraipen- eta ebaluazio-txosten bat bidaliko du dagokion batzordearen bilera baino hilabete bat lehenago. Era berean, txosten-eredu bat eta adierazle-sistema bat diseinatuko dira euskarria emateko.
- i) Bere ekintza-esparruan ematen zaion beste zeinahi funtzio.

Erakundeen Arteko Talde Teknikoak osoko bilkuran eta ad hoc osatzen diren lanerako azpitaldeetan lan egin ahalko du gehiago sakondu behar diren gai zehatzak lantzeko. Erakunde bakoitzari dagokio lanerako azpitalde bakoitza osatuko duten pertsonak izendatzea. Egokia dela irizten bada, alorrean adituak diren langileak parte hartzera gonbidatu ahalko dira.

Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimeen arretari buruzko datuen bilketa eta hedapena hobetzeko lan egiten duen eta II. akordioaren esparruan finkatu zen Informazio Sistema Taldea (IST) mantenduko da.

EATTA gutxienez urtean bitan bilduko da Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen ordezkariak koordinatuta. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak aurkeztuko du EATTaren funtzionamendurako beharrezko laguntza tekniko eta administratiboa.

Zortzigarrena

Instituzioen arteko koordinaziorako talde bat sortuko da lurralde historiko bakoitzean foru aldundi bakoitzaren Organo eskudunak bultzatuta. Talde horren funtzioa batez ere konplexutasun berezia duten kasuetan erabakiak era bateratuan eta koordinatuan hartzea izango da, eta generoaren ikusmoldearekin, interseksionalitatearen ikuspegiarekin eta ahalduntzearen printzipioarekin bat datorren era oso eta koherente batean ekitea bermatuko du.

Bederatzigarrena

Akordio hau indarrean jartzeak 2009an sinatutako erakundeen arteko II. Akordioaren indarraldia bukatzea dakar.

Hamargarrena

Akordio hau sinatzen den egunaren hurrengoan sartzen da indarrean eta lau urte iraungo ditu; aho batez adostu ahalko da gehienez lau urte gehiago luzatzea edo iraungitzea.

**Eta aurrekoarekin ados daudela adierazteko, akordio hau sinatzen dute,
Vitoria-Gasteizen, 2023ko urtarrilaren 19an.**

Sr. Iñigo Urkullu Renteria jn.,
Eusko Jaurlaritzako lehendakaria.
Lehendakari del Gobierno Vasco.

Sr. Ramiro González Vicente jn.,
Arabako diputatu nagusia.
Diputado General de Álava.

Sr. Unai Rementería Maiz jn.,
Bizkaiko diputatu nagusia.
Diputado General de Bizkaia.

Sr. Markel Olano Arrese jn.,
Gipuzkoako diputatu nagusia.
Diputado General de Gipuzkoa.

Sr. Gorka Urtaran Agirre jn.,
EUDEL/Euskadiko Udalen Elkarteko presidentea.
Presidente de Eudel/Asociación de Municipios Vascos.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Acuerdo,
en Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2023.

Botere Nagusiaren Kontseilu Judizialeko Ordezkaría.
Representante del Consejo General del Poder Judicial.

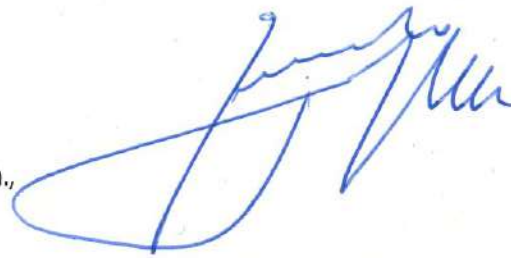


Sra. **Carmen Adán del Río** and.,
Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia.
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Sr. **Manuel Lezertua Rodriguez jn.**,
Arartekoa.
Ararteko.

Sr. **Gerardo López Sánchez-Saratxaga jn.**,
Legelarien Euskal Kontseiluko presidentea.
Presidente del Consejo Vasco de la Abogacía.



Sr. **Cosme Naveda Pomposo jn.**,
Euskadiko Sendagileen Kontseiluko presidentea.
Presidente del Consejo Médico Vasco.

